

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 30 de diciembre de 1992.—El Ministro para las Administraciones Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director técnico de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local.

**2170** *ORDEN de 30 de diciembre de 1992 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo 1.374/1991, promovido por don Daniel Mateos Riaño.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado sentencia, con fecha 9 de octubre de 1992, en el recurso contencioso-administrativo número 1.374/1991, en el que son partes, de una, como demandante, don Daniel Mateos Riaño, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 25 de abril de 1991, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 3 de agosto de 1990, sobre subsidio de defunción.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallo: En atención a lo expuesto, la Sección Segunda de esta Sala, ha decidido: Desestimar la causa de inadmisibilidad alegada, desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Luis Martínez Fernández, en nombre y representación de don Daniel Mateos Riaño, contra resolución de la Dirección Provincial de MUFACE en Asturias de fecha 3 de agosto de 1990, y resolución de la Dirección General de Recursos que desestima el recurso de alzada formulado contra la anterior, estando representada la Administración demandada por el Abogado del Estado, resoluciones que se confirman por ser ajustadas a Derecho, sin hacer expresa imposición de costas procesales.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 30 de diciembre de 1992.—El Ministro para las Administraciones Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

**2171** *ORDEN de 30 de diciembre de 1992 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo 2.128/1990, promovido por don Manuel Pérez Herrero.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencia, con fecha 8 de octubre de 1992, en el recurso contencioso-administrativo número 2.128/1990, en el que son partes, de una, como demandante, don Manuel

Pérez Herrero, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución presunta del Ministerio para las Administraciones Públicas, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local de fecha 29 de diciembre de 1989, sobre revisión de la pensión de jubilación.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel Pérez Herrero contra la desestimación tácita, por silencio administrativo, del recurso de alzada planteado contra desestimación tácita de la petición formulada, en fecha 29 de diciembre de 1989, a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local (MUNPAL), en solicitud de revisión de la pensión de jubilación del recurrente, reconociendo la aplicación de nuevo porcentaje con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 1985; sin hacer expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 30 de diciembre de 1992.—El Ministro para las Administraciones Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director técnico de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local.

**2172** *RESOLUCION de 15 de enero de 1993, de la Dirección General de MUFACE por la que se convoca la concesión de ayudas económicas para adquisición de viviendas por los mutualistas de MUFACE, durante el año 1993.*

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.º de la Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas de 29 de julio de 1987 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de agosto), por la que se establece, con el carácter de prestación de asistencia social, una ayuda económica para la adquisición de viviendas por mutualistas de MUFACE,

Esta Dirección General ha resuelto aprobar la siguiente:

**CONVOCATORIA SOBRE CONCESION DE AYUDAS ECONOMICAS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS POR LOS MUTUALISTAS DE MUFACE DURANTE EL AÑO 1993**

#### 1. Características generales de las ayudas

1.1 En las condiciones y con los límites señalados en los epígrafes 1.2 y 1.3 siguientes, las ayudas consistirán en la cobertura por MUFACE de un máximo de dos puntos del tipo de interés de los préstamos hipotecarios entregados a los mutualistas por el Banco Exterior, el Banco Hipotecario o la Caja Postal, para la adquisición por aquéllos, durante 1993 y mediante compraventa o construcción propia, de primera vivienda para domicilio habitual.

Dichas Entidades, precisamente por su condición de Entidades públicas de crédito, estaban capacitadas para suscribir y han suscrito con MUFACE el oportuno Convenio para el buen fin de la prestación.

1.2 Los puntos del tipo de interés del préstamo que en cada caso concreto cubrirá la ayuda de MUFACE, siempre que un máximo de dos, serán la diferencia entre el tipo nominal del préstamo a la fecha de su formalización, sea aquél fijo o variable y la cifra resultante de restar dos puntos al menor de los tipos de interés vigentes, en la fecha de concesión de la ayuda, para los préstamos detallados en los anexos I, II y III de esta Resolución.

1.3 El importe máximo de los préstamos, determinado en función del valor de tasación de las viviendas, no supera el límite establecido en el artículo 2.º, 2, b), de la citada Orden de 29 de julio de 1987, por lo que el importe de cada ayuda se calculará, en valor financiero actual, con base en los siguientes datos:

A) Los puntos del tipo de interés que hayan de ser cubiertos, según las reglas del epígrafe precedente.